LA INCORPORACION DE ESTANDARES INTERNACIONALES Y SUPRANACIONALES EN EL DERECHO INTERNO

*Dr. Rubén Hernández Valle*¹

SUMARIO: 1. Introducción. 2. El alcance jurídico del diálogo entre los tribunales internacionales de derechos humanos y los tribunales nacionales. 3. Los fundamentos de la recepción 4. El caso europeo 5. El caso americano 6. Conclusiones

1. *Introducción*

El denominado diálogo jurisprudencial entre los tribunales internacionales de derechos humanos y los tribunales nacionales o de derecho interno, especialmente con los tribunales supremos de orden constitucional y con las diferentes Salas de Casación, es un fenómeno relativamente reciente en América Latina.

2. *El alcance jurídico del diálogo entre los tribunales internacionales de derechos humanos y los tribunales nacionales*

El fin perseguido por la incorporación de estándares internacionales y supranacionales en el derecho interno es mantener **una cierta coherencia sustancial**

de las jurisprudencias entre los tribunales internacionales de derechos humanos y los tribunales internos, impidiendo de esa forma que se produzcan contradicciones insalvables y buscando, al mismo tiempo, **interpretaciones convergentes que permitan materializar el principio de equivalencia y suficiencia sustancial de los derechos.**

Según este último principio, la eficacia de los derechos humanos debe ser equivalente en todas las jurisdicciones y para conseguir ese objetivo deben ser aplicados de manera armónica, de manera tal que se respete su contenido sustancial.

Por ello, los tribunales nacionales deben guiarse por el principio de **armonización**, que no es lo mismo que uniformidad, según lo ha precisado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos – en adelante TEDH-, dado que cada legislación interna tiene sus propios matices que exigen una adaptación de la doctrina general sentada por los tribunales internacionales.

Esta adaptación se produce por medio de la teoría del “margen de apreciación nacional”

¹ *Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad La Sapienza, Roma. Catedrático en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Redactor por encargo de la Organización de Naciones Unidas de la Constitución Política de Guinea Ecuatorial (1982). Ha sido profesor invitado en prestigiosas universidades latinoamericanas y europeas. Vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Director de la Revista de Derecho Constitucional Costarricense.*

desarrollada por el TEDH y que todavía no ha sido recogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos – en adelante CIDH-.

Según esta doctrina, en todo derecho fundamental se debe distinguir un núcleo “duro” o “fundamental”, no reducible ni negociable, y otro segmento, más maleable, donde los Estados pueden introducir variantes de contenido atendiendo razones, por ejemplo, de buenas costumbres, moral pública, interés social, etc, conceptos jurídicos indeterminados que varían de un ordenamiento a otro. Si un tribunal regional de derechos humanos sienta en una causa una tesis recurriendo “al margen de la apreciación nacional” de un país puntual, tal doctrina, a la medida para ese Estado, no debería obligar a los demás. En otras palabras, la obligación de seguimiento a las interpretaciones formuladas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos, obliga a distinguir entre “interpretaciones en lo fundamental” o “esenciales”, o “definicionales”, e “interpretaciones contingentes” o ad hoc, de valor solamente en principio) para el caso en donde fueron formuladas.

De acuerdo con el TEDH los ordenamientos jurídicos internos deben regirse por el principio general de compatibilidad con el derecho convencional, constituido en Europa por el CEDH y la jurisprudencia del TEDH y, en el caso de América Latina, por la CADH y la jurisprudencia de la CIDH. En otros términos, de conformidad con este principio, la legislación interna debe interpretarse conforme a la CADH y a la jurisprudencia de la CIDH.

No obstante, es importante señalar que el diálogo no puede ser en un solo sentido, pues en tal caso no existiría diálogo del

todo, por lo que los tribunales regionales sobre derechos humanos, tienen que tomar en cuenta la jurisprudencia decantada, a lo largo del tiempo, por los tribunales constitucionales de los países signatarios del respectivo tratado. De esa forma, los desarrollos jurisprudenciales de los tribunales constitucionales deben ser tomados en cuenta, conforme al principio de progresividad, por los tribunales regionales respectivos. Consecuencia de ello, se produce un enriquecimiento recíproco entre ambas jurisdicciones.

Por otra parte, debe distinguirse este diálogo jurisprudencial fecundo entre los tribunales internos y los tribunales regionales de derechos humanos, de la competencia y obligación que tienen los tribunales internos de ejecutar las sentencias de los tribunales regionales. En este caso, estamos en presencia de una obligación jurídica concreta, que se circunscribe al cumplimiento de una sentencia específica en cuyo proceso el Estado fue parte y resultó condenado a adoptar medidas específicas como parte de la restitución de los derechos de la víctima. En algunos casos, tales sentencias imponen obligaciones específicas a los propios órganos jurisdiccionales, las cuales deben ser cumplidas sin ninguna objeción y sin poder invocar válidamente institutos como los de la cosa juzgada material, etc, tal y como lo han hecho los tribunales nicaragüenses para no acatar las sentencias de la CIDH.

Sin embargo, la interpretación dada por el tribunal regional en esa sentencia particular, tiene efectos erga omnes hacia el futuro, no sólo para los tribunales internos del país que fue parte en el proceso, sino también para los órganos jurisdiccionales de los restantes países signatarios del respectivo tratado. En

el peor de los casos, las interpretaciones de los derechos humanos que haga el respectivo tribunal regional deben servir, al menos, como auxiliar o criterios interpretativos a ser tomados en cuenta por los tribunales internos.

Sin embargo, la tesis dominante hoy día es que las interpretaciones realizadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos tienen efectos generales que van más allá del fallo, tanto respecto del Estado implicado como respecto de terceros Estados. La razón para ello es que los tribunales regionales en la materia realizan no sólo una función crucial de protección a la víctima, sino también cumplen con una función preventiva de proteger el interés general de naturaleza colectiva para el sistema de protección de los derechos humanos.

En efecto, los casos concretos sometidos a los tribunales regionales sobre derechos humanos evidencian problemas de carácter general de los instrumentos convencionales, que requieren clarificación, salvaguarda y desarrollo.

Esta segunda función fue puesta de relieve por el TEDH prácticamente desde sus inicios en el caso Irlanda vs Reino Unido, cuando sostuvo que *“Las sentencias del Tribunal, de hecho, sirven no sólo para decidir los casos planteados ante el Tribunal, sino, más en general, para dilucidar, salvaguardar y desarrollar las normas instituidas por la Convención, contribuyendo así a la observancia por los Estados de los compromisos asumidos por ellos como Partes Contratantes (art. 19)”* (EDHR, Ireland vs United Kingdom Judgment of 18 January 1978, párrafo 154).

3. **Los fundamentos de la recepción**

Hoy día existe una importante relación entre los tribunales constitucionales y los internacionales que tutelan los derechos humanos. Dado que tanto las sentencias como la jurisprudencia de los tribunales constitucionales son recurribles ante los tribunales internacionales sobre derechos humanos, es claro que estos últimos han terminado siendo, en última instancia, los contralores de la regularidad jurídica de las resoluciones de los órganos internos de los países signatarios del respectivo tratado.

Dentro de este orden de ideas, el TEDH ha calificado al CEDH como un instrumento constitucional que es esencial para el orden público europeo, a fin de asegurar el respeto de los compromisos de los Estados parte. (ECHR, Loizidou vs Turkia, Judgment of 23 March, 1995, párrafos 75 y 93).

Por otra parte, los tribunales constitucionales son los intermediarios naturales de los tribunales internacionales de derechos humanos, dado el carácter supremo que tiene la interpretación de los derechos en ambas jurisdicciones. Además, a los primeros les corresponde explicar, aplicar y divulgar la jurisprudencia internacional sobre los derechos humanos en la jurisdicción interna.

Un ejemplo concreto explicará mejor esta relación de supremacía de los tribunales internacionales sobre los internos. El TEDH dedujo del artículo 8, apartados 2 y II de la CEDH, el principio de proporcionalidad.

Este principio, como es sabido, ha tenido gran influencia en todos los tribunales constitucionales del mundo, a partir de su recepción por el Tribunal Constitucional alemán que lo terminó de precisar desde el punto de vista dogmático.

En el caso de las sentencias internacionales ellas son obligatorias por el texto mismo de los tratados. De allí que también la eficacia de sus interpretaciones de las normas sobre derechos humanos que gozan de gran flexibilidad, termine teniendo el valor de "norma interpretada". Esta eficacia de la "norma interpretada" tiene un efecto armonizador sobre los ordenamientos jurídicos nacionales.

Por tanto, la jurisprudencia de los tribunales internacionales, en cuanto desarrolla los propios tratados sobre derechos humanos y actualiza los contenidos de los derechos que evolucionan con las sociedades democráticas, debe gozar de la misma obligatoriedad que tienen sus sentencias.

En la praxis se produce un enriquecimiento recíproco entre ambas jurisdicciones. No se trata de construir un resultado unificador por sí mismo, sino del resultado de la evolución de un pluralismo constitucional. Se trata de que ambas jurisdicciones se retroalimenten recíprocamente, pero en el entendido, como lo ha subrayado el TEDH que ante una norma escrita, ésta debe ser aplicada en los términos en que la jurisdicción competente la ha interpretado (**ECHR, Kruslin vs France, Judgment of 24 April 1999, párrafos 906-911**).

Dentro de este orden de ideas, por ejemplo, la Corte Costituzionale italiana le ha otorgado, sin reserva alguna, pleno valor a la interpretación de las normas del CEDH

hecha por el TEDH (**Corte Costituzionale, sentencias números 348 y 349 del 24 de octubre del 2007, párrafo 4.6.**).

4. El caso europeo

La CEDH desde su creación en 1959 ha dictado una gran cantidad de sentencias y producido una importante línea jurisprudencial.

En el sistema europeo, el diálogo de la CEDH con los tribunales nacionales se ha producido no sólo con los tribunales constitucionales, sino también con las Salas de Casación.

El TEDH ha considerado que su jurisprudencia es válida no sólo para los casos expresamente decididos, sino que tales resoluciones también despliegan efectos generales incluso para Estados que no estuvieron implicados en el proceso.

Ello ha permitido que los tribunales nacionales hayan comenzado recibir la jurisprudencia sentada por los tribunales internacionales, dando lugar a un diálogo fecundo entre ambas jurisdicciones.

En Italia, por ejemplo, la Corte Costituzionale en materia de inviolabilidad parlamentaria (art 68 Constitución italiana), se planteó la posibilidad de intervención procesal de un tercero que se había considerado ofendido por las expresiones del parlamentario. En un juicio anterior, el citado tribunal había negado la posibilidad de intervención procesal a terceros, lo cual trajo como consecuencia que Italia fuera condenada por el TEDH por violación del derecho a un juicio equitativo que consagra el artículo 6.1 de la CEDH (**Cordova vs Italia, Judgment of 30 January, 2003**). Como consecuencia de esta sentencia del TEDH, la Corte Costituzionale

italiana le dio recepción al nuevo criterio interpretativo de la jurisprudencia de aquél, por considerar que la mencionada prohibición de participación procesal de los terceros interesados, era violatoria del artículo 6 del CEDH, tal y como lo había afirmado el TEDH en la precitada sentencia *Cordova vs Italia*.

La misma Corte Costituzionale acogió la jurisprudencia sentada por el TEDH con relación al derecho a la defensa procesal del rebelde y la garantía de un juicio con celeridad. El tribunal italiano, con base en la jurisprudencia sentada por el TEDH en los casos *Colozza vs Italia* y *F.C.B. vs Italia* y otros, le dio una lectura garantista al derecho a un juicio justo (art 6, CEDH), estableciendo que si bien el proceso debe ser sustanciado en plazos breves, el mismo debe ser igualmente justo para respetar los derechos de los imputados (**Corte Costituzionale, sentencia del 4 diciembre 2009**). En suma, el tribunal italiano interpretó el artículo III de la Constitución italiana a la luz de la jurisprudencia del TEDH sobre el contenido del artículo 6 de la CEDH.

La Corte de Casación Italiana reiteradamente ha reconocido como obligatorio y de aplicación directa las normas contenidas en la CEDH, aplicándolos en la forma en que han sido interpretadas por el TEDH (**Tribunal Casación italiano, sentencia del 12 de mayo de 1993, sentencia del 3 de octubre del 2006, entre otras**).

En Alemania, el Tribunal Constitucional ha establecido con carácter general que los jueces nacionales están obligados a ajustarse a las sentencias del TEDH, ya que “el texto del Convenio y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sirven, a nivel de Derecho Constitucional, como guía

para la interpretación de los contenidos y fines de los derechos fundamentales y de los principios constitucionales de la Ley Fundamental”(**Tribunal Constitucional Alemán, caso Gürgülü, sentencia del 14 de octubre del 2004**).

Finalmente, en España, la recepción de la jurisprudencia del TEDH ha sido relativamente fácil, pues el artículo 10.2 de la Constitución española establece que las normas relativas a los derechos deben interpretarse de conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados.

La aplicación de esta norma ha conducido al Tribunal Constitucional Español a desarrollar la tesis conforme a la cual los tratados sobre derechos humanos son “fuente interpretativa” de los derechos reconocidos en la Constitución, lo que evidentemente ha facilitado la recepción de la jurisprudencia del TEDH (**Sentencia número 236 del 7 de noviembre del 2007 y sentencia número 63/2010 del 18 de octubre del 2010**).

Los ejemplos de estos tres países, cuya sensibilidad jurídica es bastante cercana a la nuestra, demuestran como la jurisprudencia del TEDH ha ido calando, poco a poco, en los principales los tribunales constitucionales del mundo. Esta recepción de la jurisprudencia del TEDH se ha extendido también a otros países como Letonia, Polonia, etc.

5. El caso americano

En las sentencias de los tribunales internos latinoamericanos se citan con frecuencia las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero sin que su criterio sea vinculante, aunque normalmente se

respetan sus lineamientos jurídicos debido a su autoridad científica. Igual sucede con la jurisprudencia de la CIDH y, en menor grado, con la jurisprudencia de la Comisión Interamericana.

La legislación peruana establece la obligación de sus jueces de interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales a la luz de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte. Es decir, en este ordenamiento las sentencias de los tribunales internacionales y, especialmente la jurisprudencia de la CIDH, sirve como instrumento interpretativo para los órganos titulares de la jurisdicción constitucional.

Otros tribunales, como la Sala Constitucional costarricense, consideran vinculante la jurisprudencia de la CIDH, ya sea en el ejercicio de su competencia consultiva o contenciosa. Verbigracia, una opinión consultiva de la CIDH que estableció que la colegiatura obligatoria para ejercer la profesión de periodista era incompatible con la Convención Americana a finales de los años ochenta, fue aplicada literalmente por la Sala Constitucional para declarar inconstitucional la Ley del Colegio de Periodistas que establecía esa obligatoriedad.

Los artículos 1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional confieren a la Sala Constitucional costarricense la potestad para “garantizar los principios del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación” y “ejercer la conformidad del ordenamiento interno con el Derecho Internacional o Comunitario”, respectivamente.

Asimismo, la Corte Constitucional de Colombia, desde 1995, adoptó la doctrina del bloque de constitucionalidad, dentro del cual incluye la jurisprudencia de la CIDH. A partir de 1999 estableció que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eran vinculantes para el Estado colombiano.

La Corte Suprema Argentina representa el ejemplo más claro de aplicación de la jurisprudencia de la CIDH.

Dentro de este orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia Argentina, en el Fallo Espósito, admitió el recurso extraordinario deducido contra una sentencia que había declarado extinguida la acción penal por prescripción en una causa abierta por hechos que luego fueron juzgados por la CIDH.

Sostuvo la Corte Argentina que “resultan de cumplimiento obligatorio para el Estado argentino (68.I CADH), por lo cual también ella, en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal internacional” (Considerando 6).

Previo a ello, puntualizó que el rechazo de la apelación tendría como efecto inmediato la confirmación de la declaración de prescripción de la acción penal, en contravención de lo decidido por la Corte Interamericana en su sentencia de 18 de setiembre del 2003 en el caso “Bulacio c/ Argentina”, en el que se declaró la responsabilidad internacional del país.

En el Fallo “Arancibia Clavel”, la Corte Suprema de Justicia Argentina declaró procedente una queja y el recurso extraordinario que había sido denegado por la Cámara Nacional de Casación Penal, revocando la sentencia de este último tribunal, en cuanto había

declarado extinguida la acción penal por prescripción en la causa seguida por el delito de asociación ilícita con fines de persecución y exterminio de los opositores políticos.

Entre varios argumentos, el voto de mayoría estableció que el delito de asociación ilícita perpetrado para perseguir opositores políticos por medio de homicidios, desapariciones forzadas de personas y tormentos reviste carácter de crimen contra la humanidad, y por ende, es imprescriptible a pesar de lo que indique la legislación interna, pues la legislación interna resulta desplazada por el Derecho Internacional Consuetudinario y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

Para aplicar este criterio se basó en la jurisprudencia sentada por la CIDH a partir del caso *Velásquez Rodríguez*, según la cual es deber de todo Estado signatario de la Convención Americana, organizar el aparato gubernamental, en todas sus estructuras del ejercicio del poder público, de tal manera que sus instituciones sean capaces de asegurar la vigencia de los derechos humanos, lo cual incluye el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención. Desde este punto de vista, la aplicación de las disposiciones de Derecho interno sobre prescripción constituye una violación al deber del Estado de perseguir y sancionar y, consecuentemente, compromete su responsabilidad internacional (Caso *Barrios Altos*, sentencia del 14 marzo 2001, considerando 41; Caso *Trujillo Oroza vs Bolivia*, Reparaciones, sentencia del 27 de febrero del 2002, considerando 106, entre otras).

En el Fallo “Simón”, la Corte Suprema Argentina afrontó el complejo tema de analizar la constitucionalidad de las denominadas leyes de “punto final” y de “obediencia debida”. La Corte terminó declarándolas inconstitucionales. Al mismo tiempo privó de cualquier efecto jurídico, además de dichas leyes, a cualquier acto fundado en ellas que pudiera oponerse al avance de los procesos penales que se instruyan, o al juzgamiento y eventual condena de los responsables, u obstaculizar en forma alguna las investigaciones llevadas a cabo por los canales correspondientes y en el ámbito de sus respectivas competencias, por crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio argentino.

En el Considerando 24 del Fallo, la Corte dijo que las conclusiones a que llegó la CIDH en el caso “Barrios Altos”, citado en el Fallo *Arancibia Clavel*, tenían necesariamente que trasladarse de manera imperativa en este caso, si es que las decisiones de la CIDH “han de ser interpretadas de buena fe como pautas jurisprudenciales”.

En el Considerando 26 dijo que la CIDH en el precitado caso “Barrios Altos” había establecido “severos límites a la facultad del Congreso para amnistiar, que le impiden incluir hechos como los alcanzados por las leyes de “punto final” y “obediencia debida”. Del mismo modo, toda regulación de derecho interno que, invocando razones de “pacificación” disponga el otorgamiento de cualquier forma de amnistía que deje impunes violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por el régimen al que la disposición beneficia, es contraria a claras y obligatorias disposiciones de derecho internacional, y debe ser efectivamente suprimida”.

En el Fallo “Mazzeo”, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales varios decretos ejecutivos emitidos por el Presidente de la República Argentina, mediante los cuales había emitido indultos que habían beneficiado a sujetos acusados de delitos de lesa humanidad.

La Corte fundamentó su sentencia en los argumentos vertidos por la CIDH en el caso “Almonacid Arellano” de 26 de setiembre del 2006. Argumentó la Corte Suprema Argentina en los siguientes términos:” La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde su inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no sólo el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete último de la Convención Americana” (párrafo 124).

Ahora bien, a partir de la sentencia Almonacid vs Chile del 26 de setiembre de 2006, la jurisprudencia de la CIDH se volvió obligatoria para todos los tribunales internos de los países que admiten su jurisdicción plena.

En efecto, el precitado caso Almonacid Arellano vs Chile, la CIDH marcó un hito importante en la tutela de los derechos fundamentales en América Latina. En esa sentencia la Corte definió dentro del marco del Pacto de San José, el denominado control de convencionalidad a practicarse en lo sucesivo por los jueces nacionales.

En el párrafo 124 de la sentencia se dijo lo siguiente: “La Corte es consciente que los jueces y tribunales están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes del ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esa tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete último de la Convención Americana”.

En el párrafo siguiente, es decir en el 125, la Corte agrega que “En esa misma línea de ideas, esta Corte ha establecido que “según el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser acatadas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno”. Esta regla está codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre los Tratados, de 1969

Esta doctrina fue repetida, sin ulteriores variantes, en los casos La Cantuta vs Perú del 29 de noviembre del 2006, considerando 173, y en Boyce vs Barbados, del 20 de noviembre del 2007, considerando 78.

Sin embargo, en el caso de Aguado Alfaro y otros, conocido como Trabajadores Cesados del Congreso vs Perú, del 24 de noviembre del 2006, en el Considerando 126, la Corte precisó mejor su doctrina en la siguiente forma:

“Cuando el Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad, ex officio, entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el cuadro de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales pertinentes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, sin considerar otros supuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de este tipo de acciones”(Caso Aguado Alfaro y otros vs Perú, sentencia del 24 noviembre 2006, considerando 126).

Dentro de este orden de ideas, la Corte Suprema mexicana ha establecido que la jurisprudencia de la CIDH es vinculante para ella cuando sea emitida en casos en que el Estado mexicano ha sido parte. Cuando, en cambio, México no ha sido parte en el proceso internacional, la jurisprudencia de la CIDH tiene “un carácter de criterio orientador de todas las decisiones de los jueces mexicanos, pero siempre en aquello

que le sea más favorable a la persona” **(Corte Suprema de México, caso Engrose varios, sentencia del 14 de julio del 2011, párrafo 15).**

En Chile, la Corte Suprema ha calificado obligatorio el derecho internacional de los derechos humanos, a fin de declarar que “es inadmisibles la prescripción que pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos”(Corte Suprema de Justicia de Chile, Caso Manuel Tomás Rojas Fuentes, sentencia del 13 de marzo del 2007).

En Paraguay se ha declarado obligatoria la jurisprudencia de la CIDH. En efecto, se ha afirmado que “el carácter obligatorio de la jurisprudencia de la CIDH en nuestro medio jurídica es una condición necesaria de la aplicación de los artículos 26 (buena fe en el cumplimiento de los tratados) y 27 (imposibilidad de alegar disposiciones de derecho interno) del Convenio de Viena sobre Derecho de los tratados, ratificado por el Paraguay..., así como del propio texto constitucional (art 143) que “acepta el derecho internacional” y se ajusta al principio de “protección internacional de los derechos humanos”(Juzgado de Liquidación, caso Elizabeth Flores Negri vs El Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, sentencia del 31 de julio del 2007).

Sentencias similares a las citadas se han producido, luego del 2006, en Bolivia, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, entre otros países.

Desgraciadamente, en otras legislaciones latinoamericanas la jurisprudencia de los tribunales internacionales o inclusive de la misma CIDH, no tienen ni efectos vinculantes ni condicionan la aplicación de su normativa

interna, como es el caso de Nicaragua y Venezuela por supuestamente oponerse tales resoluciones a los institutos de la cosa juzgada material y a la soberanía del Estado, respectivamente.

6. Conclusiones

Sin duda alguna, la incorporación de estándares internacionales y supranacionales en el Derecho es un fenómeno irreversible y cada vez más acentuado tanto en Europa como en América Latina. La retroalimentación que se está

produciendo entre los tribunales supremos y constitucionales internos y los tribunales regionales de derechos humanos, ha permitido decantar, cada vez con mayor precisión jurídica, el contenido esencial de los derechos humanos recogidos en las distintas Convenciones e instrumentos internacionales sobre derechos humanos. El resultado final será que cada día que pase, tanto la protección internacional como la nacional de los derechos humanos, habrá dado un paso adelante en el peregrinar incesante por alcanzar el horizonte inaccesible de la justicia.